

Movilh y comunidad LGBTIQ+ realizan balance negativo al Gobierno en materia de avance en los derechos

El texto evalúa la gestión del gobierno de Gabriel Boric respecto a los derechos de las personas LGBTIQ+. Aunque el presidente llegó al poder con una campaña muy comprometida con la igualdad y la no discriminación, el análisis sostiene que su administración tuvo un balance negativo, caracterizado por promesas incumplidas, algunos avances limitados y varios retrocesos en políticas públicas.

Una de las principales críticas es que el gobierno inició su gestión con un enfoque identitario e ideológico, utilizando conceptos como “disidencias”, lo que habría generado una percepción de confrontación política y debilitado el enfoque universal de derechos humanos. Además, se afirma que el Ejecutivo partió de un diagnóstico equivocado, al considerar que antes de su mandato se había avanzado poco en derechos LGBTIQ+, pese a que ya existían numerosas leyes y políticas públicas en áreas como matrimonio igualitario, adopción homoparental, identidad de género, salud y educación.

El programa presidencial prometía medidas como un plan nacional de derechos LGBTIQ+, un cupo laboral trans en el sector público, mejoras en salud y salud mental, cambios a la Ley de Identidad de Género



y políticas educativas inclusivas. Sin embargo, el texto indica que la mayoría de estas promesas no se concretó, y tampoco se avanzó en reformas importantes como la modificación de la Ley Zamudio, la creación de una institucionalidad antidiscriminatoria o una ley de educación sexual integral.

A pesar de ello, se reconocen algunos avances, principalmente administrativos, como circulares del Ministerio de Salud para mejorar la atención a personas trans, normas contra la discriminación en establecimientos educacionales, generación de estudios sobre violencia en comunidades escolares y ciertas políticas de inclusión en el sector público. También hubo gestos sim-

bólicos, como disculpas del Estado a víctimas de discriminación.

Sin embargo, el documento destaca retrocesos importantes, especialmente en salud, seguridad y relación con la sociedad civil. Entre ellos se mencionan restricciones a tratamientos hormonales para menores trans, la eliminación de financiamiento a programas de apoyo a víctimas de homo/transfobia, menor respaldo a organizaciones LGBTIQ+ y problemas en la generación de datos oficiales sobre diversidad sexual.

En este contexto, Ximena Olivares, coordinadora de la Unión Comunal Diversidad Copiapó y vocera del Movimiento de Integración y Convivencia (MIC) Copiapó, señaló que desde las organizaciones locales también perciben retrocesos. Según explicó, una de las propuestas del

presidente durante su campaña era impulsar la Ley José Matías, orientada a fortalecer la convivencia escolar y la protección de estudiantes LGBTIQ+. Sin embargo, aunque la iniciativa fue aprobada, finalmente se promulgó como Ley de Convivencia Escolar y se habrían eliminado las disposiciones relacionadas con niños, niñas y jóvenes trans.

Olivares también indicó que otras promesas, como acuerdos en materia de salud para personas trans, quedaron pendientes, lo que refuerza la percepción de que no se cumplieron varios compromisos asumidos durante la campaña presidencial. En ese sentido, señaló que las organizaciones de diversidad sexual de Copiapó comparten el diagnóstico de distintas fundaciones y colectivos a nivel nacional que consideran que hubo retrocesos en esta área.

En conclusión, el texto plantea que el gobierno de Boric tuvo una gestión contradictoria en materia de derechos LGBTIQ+: aunque existieron algunos avances, estos quedaron opacados por promesas incumplidas, errores de diagnóstico, descoordinación interna y decisiones administrativas que, según el análisis, provocaron retrocesos en estándares que se habían consolidado en gobiernos anteriores.